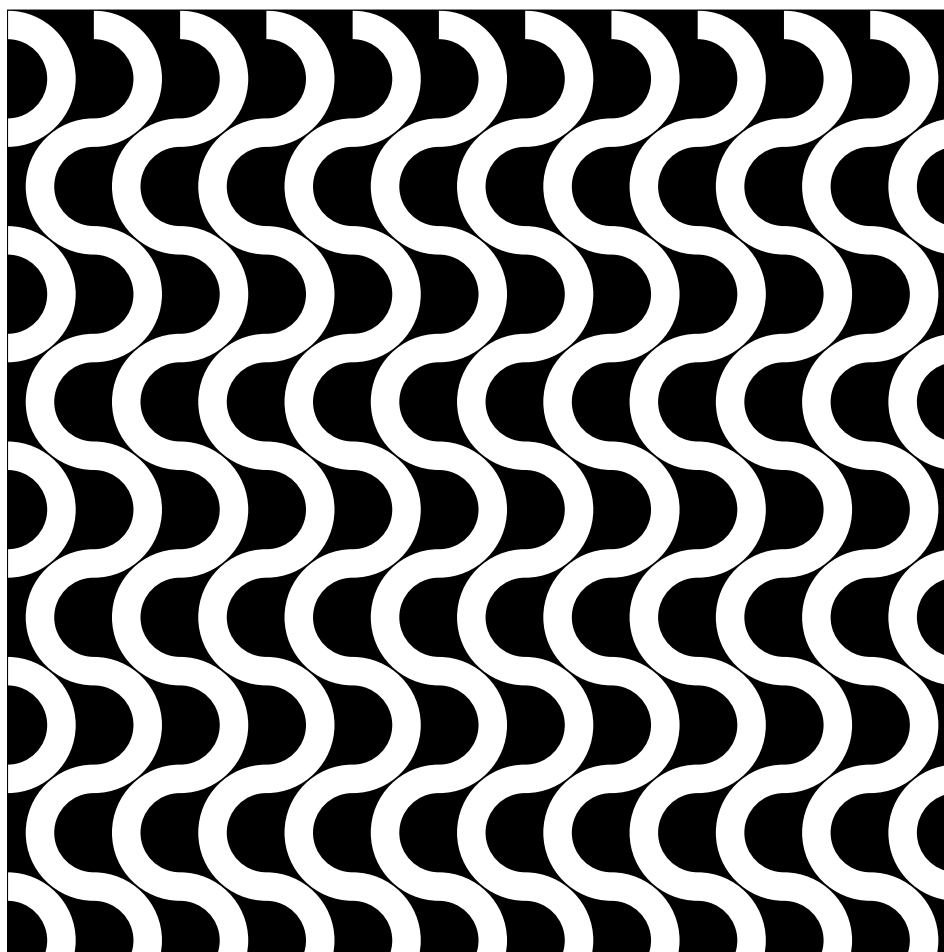


ESTUDIOS



Galería de Papel. Los telos de Waleśka. Waleśka Belisario (2023).

ABSTRACT

This paper reviews the policies of access to public information in 22 countries of the American continent and how this fundamental right is exercised in practice in each of these countries. The following study corresponds to the second installment. The first was published in the magazine N° 201 of the first quarter of the year. This second part contains the analysis of the United States, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominican Republic, Uruguay and Venezuela.

Throughout the research, not only the laws that exist in the countries are investigated, but also their execution, the decisions that may affect in some way the right to free access to information and their comparison with international standards.

El derecho a saber: una mirada en las Américas

(PARTE II)

LEÓN HERNÁNDEZ • CARLA ZAMBRANO

En este trabajo se revisan las políticas de acceso a la información pública en veintidós países del continente americano y cómo es en la práctica el ejercer este derecho fundamental en cada una de estas naciones. El siguiente estudio corresponde a la segunda entrega. La primera fue publicada en la revista N° 201 del primer trimestre del año. Esta segunda parte contiene el análisis de Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A lo largo de la investigación, no solo se indaga en las leyes que existen en los países sino en la ejecución de las mismas, las decisiones que puedan afectar de alguna manera el derecho al libre acceso a la información y su comparación con los estándares internacionales.

INTRODUCCIÓN

El acceso a la información pública, establecido en diferentes leyes y pactos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho fundamental y “... una necesidad imperante en las relaciones humanas y en la vida económica, política y social para un Estado democrático” (Cepaz, 2018).

Con la finalidad de obtener un amplio panorama de las políticas en materia de acceso a la información pública en diferentes países de las Américas, en esta segunda parte se re-

visarán los siguientes países: Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Analizando así, las leyes que existen en cada nación en comparación con los parámetros internacionales, cómo es la realidad al momento de ejercer este derecho y todo lo relacionado con el mismo.

ESTADOS UNIDOS

Incluso antes de que en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos lo adoptara en su artículo 13 –un artículo sobre el acceso

ESTUDIOS

a la información, al mencionar la libertad de expresar y recibir información—, Estados Unidos ya había abordado el tema y lo había hecho Ley.

La *Ley por la libertad de la información*, FOIA —por sus siglas en inglés—, fue promulgada en 1966, y efectiva desde el 5 de julio de 1967 (Wikipedia, 2023). Otorgó a los estadounidenses acceso a la información federal del gobierno. Aboga por el derecho a acceder a los registros de la agencia federal, con excepciones: los registros (o parte de aquellos) protegidos de la divulgación pública, ya sea según una del conjunto de las nueve excepciones preestablecidas en el gobierno, o por una de las tres exclusiones especiales para la aplicación de la FOIA.

De acuerdo con expertos consultados para el Índice Chapultepec, Estados Unidos mejoró aspectos vinculados al acceso a la información pública durante el período agosto 2021-agosto 2022, en comparación con el del periodo anterior, agosto 2020-agosto 2021

La ley no contempla excepciones por ciudadanía: cualquier persona, nacional o extranjera, puede tener acceso. Genera obligatoriedad en el Ejecutivo y en toda agencia reguladora independiente, pero no cubre el ámbito Legislativo ni el Judicial, ni tampoco el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo del jefe de la Casa Blanca, así como tampoco cuerpos privados fundados con recursos públicos.

No establece el principio de máxima publicidad. Las solicitudes elegibles deben ser contestadas en un máximo de veinte días, prorrogables por diez días más, con opción para acordar con el solicitante un lapso mayor, con posible intervención de la corte, ante la cual la agencia debería demostrar las diligencias para satisfacer la solicitud. Los solicitantes no tienen que justificar el motivo de su solicitud, y en caso de que todo o una parte de la información fuese negada, deberá aparecer en la respuesta el nombre del funcionario que negó la información, ante lo cual podría aplicar un recurso de revisión (Instituto Federal de México, 2004).

De acuerdo con expertos consultados para el Índice Chapultepec, Estados Unidos mejoró aspectos vinculados al acceso a la información pública durante el período agosto 2021-agosto 2022, en comparación con el del periodo anterior, agosto 2020-agosto 2021, mejora vinculada al cambio de gobierno y a las tensas relaciones entre la administración Trump y la prensa.

El país no dispone de una ley de secretos oficiales y la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal, pero hay leyes que protegen la información secreta y se castiga la divulgación de secretos relacionados con la defensa.

HONDURAS

Según informes en materia de transparencia internacional, Honduras se vio envuelta por años en gobiernos corruptos que coartaron el derecho al acceso a la información pública, cuestión que se agravó con la pandemia y los diferentes escándalos por las medidas tomadas que causaron dudas en la población y por la falta de información sobre los avances de la COVID-19, el uso de los fondos públicos y por la paralización de todas las solicitudes no relacionadas con la enfermedad, cosa que incumplía con el principio de máxima divulgación. Sumado a esto, se hizo recurrente la publicación de “... información inexacta divulgada en las cadenas nacionales de radio y televisión” (C-Libre, 2020; Transparencia Internacional, 2022).

Una medida que también afectó al país por años fue la *Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional* aprobada en 2014 y que otorgaba la facultad a presidentes y jefes institucionales a clasificar información como confidencial durante cinco hasta 25 años, dicha ley fue rechazada por muchos sectores en el país, pues era una puerta abierta para la corrupción y la impunidad y afectaba directamente la *Ley de transparencia y acceso a la información pública* (LTAIP).

Tras ocho años la Ley fue derogada, siendo un paso adelante para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las

promesas de la actual presidenta, Xiomara Castro, durante su campaña (EFE, 2022), esto con la finalidad de facilitar las investigaciones hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández (quien fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico), clasificado por diferentes sectores como uno de los más corruptos de la nación (France 24, 2022).

La *Ley de transparencia y acceso a la información pública* fue aprobada en julio de 2007 y, al igual que en otros países, se establece en ella un organismo que vela por este derecho, en este caso es el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). También se establece en esta ley que el acceso a la información es gratuito y que lo único que las instituciones públicas están autorizadas a cobrar es el costo de reproducción de la información solicitada. Este acceso debe solicitarse por medios electrónicos o por escrito e indicarse la información que se solicita sin tener que explicar la motivación, la solicitud debe ser respondida en diez días, pudiendo prorrogarse una vez por el mismo plazo.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en su cuarto boletín de 2020 exponía que, si bien se cuenta con la IAIP –como establece la normativa– y con diferentes portales de transparencia, estos no tenían toda la información pertinente y los datos que se encontraban, en su mayoría, no presentaban los detalles necesarios. C-Libre agregaba que el país tenía un acceso limitado a Internet. Según un estudio realizado por SMARTCOM en 2019 únicamente el 39 % tenía acceso a Internet, lo que dificultaba a muchos acceder a estos portales y, por ende, a la información pública (C-Libre, 2020).

Además, respecto al informe del primer semestre de 2022 publicado por la IAIP, 157 instituciones salieron aplazadas en transparencia, destacando a la Secretaría de Transparencia entre los entes aplazados. Analistas consultados por *El Herald* indicaron que “... la transparencia será un férreo proceso por la cultura de los funcionarios” a pesar de las expectativas que han sido generadas por el nuevo gobierno (*El Herald*, 2022). El acceso a la información pública, en la práctica, sigue siendo una tarea pendiente en la nación, que ha sufrido retrocesos en los últimos años de acuerdo con los

expertos hondureños consultados para el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

Llama la atención que, a pesar de estar en la franja de países con baja restricción a la libertad de expresión, los expertos consultados para el Índice Chapultepec perciban que Jamaica ha decaído levemente en el acceso a la información pública, como tendencia entre las ediciones de 2020-2021 y 2021-2022.

JAMAICA

Jamaica aprobó su *Ley de acceso a la información pública* en 2002. Fue promulgada por el gobierno, para ofrecer acceso público a la información y promover la confianza y transparencia en las decisiones del Ejecutivo. El texto brindó a los ciudadanos el derecho a solicitar todo tipo de información de archivos gubernamentales, en cualquier formato: copias de documentos, registros computarizados, etcétera.

La ley brinda el derecho a obtener información del gobierno, el cual puede darla, si está disponible, indicar si requiere mayor tiempo para cumplir la solicitud o negarla sin derecho de apelación.

La ley otorga al ciudadano el derecho de solicitar información en la forma que desee, siempre que no destruya el documento ni infrinja los derechos de autor sobre el mismo. No es necesario que el solicitante brinde una razón para la solicitud, solo se requiere que proporcione un nombre y una dirección de correspondencia, correo postal o correo electrónico.

El texto es obligante en lo relativo a la información disponible en todos los ministerios, organismos ejecutivos u otros órganos estatutarios, consejos parroquiales y empresas gubernamentales de propiedad absoluta y empresas en las que el gobierno posee el 50 por ciento de las acciones, aunque, en el caso de Jamaica, la Ley también permite al gobierno incluir a las empresas privadas que prestan servicios públicos esenciales para el bienestar de la socie-

ESTUDIOS

dad jamaicana. Al igual que en Estados Unidos, todos, ciudadanos, residentes y extranjeros, pueden solicitar información. La respuesta debe ser enviada en un lapso no mayor a treinta días continuos.

De modo similar a otras leyes, esta establece excepciones, como las que protegen la información por tratarse de datos privados o sensibles, de acuerdo a principios de defensa, seguridad nacional, entre otros (Centro Carter, 2005).

Llama la atención que, a pesar de estar en la franja de países con baja restricción a la libertad de expresión, los expertos consultados para el Índice Chapultepec perciban que Jamaica ha decaído levemente en el acceso a la información pública, como tendencia entre las ediciones de 2020-2021 y 2021-2022. No obstante, su *performance* en este sentido es relativamente favorable. Esto se refleja también en su Índice de Percepción de la Corrupción, en el cual Jamaica ha mantenido una mejor posición en los últimos cinco años, aunque no mejora de su puesto 70 en la última medición de 2021, de 180 países tomados en consideración (Datamacro.com, 2022).

MÉXICO

El primer antecedente del acceso a la información pública en México está contenido en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1977, en la cual se añadió, en su artículo sexto, que "... el derecho a la información será garantizado por el Estado" (Haro Vázquez, 2017).

En México, la evolución de las leyes de transparencia se hizo de lo local a lo federal y luego a lo nacional. Los primeros antecedentes de estas leyes tuvieron lugar en los estados de Jalisco y Sinaloa, en los primeros meses de 2002. Meses después, fue aprobada la *Ley federal de transparencia* en México, el 11 de junio de 2002, con entrada en vigencia el día siguiente, la cual tuvo como finalidad principal brindar acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad fede-

ral. No obstante, refiere Haro Vázquez (2017), que fue en el año 2007:

[...] que una segunda reforma al artículo sexto constitucional, estableció los principios rectores de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, para su ejercicio en el ámbito federal, estatal y municipal. Posteriormente, en el año 2009, la reforma al artículo 16° constitucional elevó a rango constitucional la protección de los datos personales, creándose los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, también denominados derechos de ARCO. (P.8)

En febrero de 2014 fue promulgada una reforma constitucional en materia de transparencia, que intentaba avanzar en garantizar un marco normativo que concentrara las acciones en relación al tema, pero no fue sino hasta el 4 de mayo de 2015 cuando se logra un marco regulatorio general, con la entrada en vigencia de la *Ley general de transparencia y acceso a la información pública*, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, por disposición de la Cámara de Diputados del Congreso. A semejanza de otras de su naturaleza, esta ley genera obligatoriedad en el acceso a la información para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como para la información de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

A diferencia de otros casos, como el de Estados Unidos, que no incluye a las cortes ni a la rama legislativa, esta ley sí genera obligatoriedad en los tres poderes. Adicionalmente, en contraste con el caso canadiense y norteamericano, así como a diferencia de otros instrumentos latinoamericanos en la materia, la ley mexicana sí establece el principio de máxima publicidad, pues es el Estado el que debe garantizar el efectivo acceso, según reza en sus artículos 6 y 7:

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2015)

El texto legal también especifica no solo normas de cumplimiento, además, describe en detalle la estructura del Sistema Nacional de Transparencia en su artículo 30, a saber, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este Sistema Nacional de Transparencia, según lo estipula el artículo 32 de la ley, contará con un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del mismo y será presidido por el presidente del Instituto. Además, en su artículo 37 determina que los organismos garantes de la ley son “... autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados” (*Ibidem*).

Por otra parte, se establece un máximo de cinco años el plazo de reserva clasificada de información con posibilidad de prórroga por cinco años más, previa aprobación del comité de transparencia correspondiente; mientras que en las solicitudes elegibles, el lapso máximo de respuesta al ciudadano o al periodista es de diez días. Se considera clasificable la información que, a semejanza de las descritas en modelos y leyes ya citados, amenace la seguridad o provoque riesgo personal, entre otras causales, pero nunca la vinculada a violación de derechos humanos ni actos de corrupción.

El texto legal también especifica no solo normas de cumplimiento, además, describe en detalle la estructura del Sistema Nacional de Transparencia en su artículo 30, a saber, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el país con mayores cifras de violencia contra periodistas en toda América, el acceso a la información pública también se ve imbuido en severas fallas del mecanismo de protección a los comunicadores, que, por consecuencia, implica autocensura y silencio en algunos temas que deberían ser de conocimiento público. México representa, entonces, un caso de excelente literatura en materia legal, pero no necesariamente un caso amigable de acceso a la información pública.

NICARAGUA

Desde la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1947, 1950-1956), hasta la del régimen de Daniel Ortega (1985-1990, 2007-), Nicaragua ha sido privada de los derechos humanos por muchos años. Cierre de periódicos, programas de radio y televisión, acoso y violencia policial, represión y, claramente, obstrucción en el acceso de la información pública, son algunas de las cosas que vive la ciudadanía. El país es,

ESTUDIOS

además, el segundo más corrupto de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de Corrupción de 2021.

En 2007 se promulgó la *Ley de acceso a la información pública*, en esta se dispone que cada entidad debe tener una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP). También aprueba la creación de una Coordinación de Acceso a la Información Pública por cada poder del Estado, los Gobiernos Regionales Autónomos y Gobiernos Municipales. Por último, se establece la creación de la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, de carácter interinstitucional.

Cierre de periódicos, programas de radio y televisión, acoso y violencia policial, represión y, claramente, obstrucción en el acceso de la información pública, son algunas de las cosas que vive la ciudadanía. El país es, además, el segundo más corrupto de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de Corrupción de 2021.

La solicitud se puede realizar de forma verbal, escrita o por correo electrónico. La institución debe registrarla en un formulario y al interesado se le debe entregar una copia del mismo. La petición debe incluir:

- a. Nombre de la autoridad a quien se solicita la información.
- b. Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio del solicitante.
- c. Cédula de identidad o cualquier tipo de identificación o el número de las mismas, en el caso de menores de 16 años podrán presentar su Partida de Nacimiento de los Extranjeros podrán presentar Pasaporte vigente, Cédula de Residencia o los números de las mismas.
- d. Descripción clara y precisa de la información solicitada.
- e. Dirección Postal o correo electrónico señalado para recibir la información o notificaciones.

(Artículo 27, *Ley de acceso a la información pública*)

El plazo para responder el requerimiento es de quince días hábiles, prorrogables por diez días más. Además, el acceso es gratuito, solo pagándose los costos de reproducción, de ser necesario. De recibirse una negativa, el solicitante puede apelar ante la Oficina de Acceso a la Información Pública.

Esta ley suele ser ignorada por los entes que deberían apegarse a ella y generalmente no se atienden las solicitudes. El informe publicado por el observatorio Urnas Abiertas, en septiembre de 2022, indicó que poco a poco se han desaparecido los espacios de auditoría social, las OAIP han ido cerrando y los entes entregan información limitada sobre los presupuestos, lo que impide la participación ciudadana. El Índice de Transparencia Municipal de este mismo observatorio mostró que "... todas las alcaldías de las 17 cabeceras departamentales se catalogan con 'Poca' o 'Casi nada' de transparencia en la rendición de cuentas" (Urnas Abiertas, 2022).

Por otra parte, la *Ley especial de ciberdelitos*, aprobada en 2020 y reconocida como "ley mordaza" o "ley bozal", prohíbe, entre otras cosas, la "propagación de noticias falsas" a través de las TIC. Este artículo, como muchos de esta ley, se ha prestado para la censura en los medios digitales. Una víctima de esta ley fue Donald Alvarenga, apresado el 6 de noviembre de 2022 y declarado culpable por delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

Se ha acusado a fundaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que se encarga de apoyar a medios independientes, se ha amenazado a periodistas y, durante la pandemia, se acusó a los médicos de difundir noticias falsas al informar la realidad de la COVID-19 en la nación (Divergentes, 2022). Así, esta ley ha sido utilizada por los dirigentes para amenazar a los ciudadanos que se pronuncien en contra del régimen y den a conocer información que debería ser de acceso público. Múltiples han sido los llamados de la CIDH y otras organizaciones para que el Estado deje de usar esta ley para limitar la circulación de la información.

A esto se le suma el convenio firmado con Rusia en 2021, con el que han buscado evitar

que ciertos países, que rechazan al gobierno de Ortega, difundan información falsa sobre la dictadura con la excusa de “garantizar la seguridad de la información internacional” (Divergentes, 2022). Aunado a esto, el proceso de cierre de más de treinta medios informativos, entre los que destaca *CNN* en español en 2022 y el de *100% Noticias*, en 2018 (Selser, 2022), ha afectado fuertemente el acceso a la información, sobre todo en las zonas rurales, donde el cierre de emisoras ha dejado a todos los habitantes desinformados (Hernández, 2022). Estas son otras de las muchas prácticas que impiden que los nicaragüenses accedan a información de su interés.

Estos intrínquilis en materia de acceso a la información pública, entre otros aspectos sobre controles y persecución judicial a periodistas, dejaron a esta nación en el último lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, en su más reciente edición.

PANAMÁ

Panamá ha tenido varios escándalos por corrupción, mal manejo del presupuesto público, la restricción de actas que deberían ser de acceso público y más, sobre todo durante la pandemia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción en 2021, Panamá obtuvo 36 puntos de 100, siendo 100 la calificación máxima para los países libres de corrupción y 0 el de corrupción elevada (Transparencia Internacional, 2022).

Una prueba de esto es la entrega de decenas de millones de dólares destinados a las pequeñas y medianas empresas con los programas de Garantía de Banca de Oportunidades y el programa Global del Crédito. Para 2021 eran múltiples las denuncias de que estas no llegaban y tanto el Banco Nacional como la Caja de Ahorros y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) se negaron a “... dar información sobre estos préstamos que se entregan con fondos públicos” (Triny, 2021). El diario *La Prensa* intentó solicitar diversas informaciones sobre este tema, pero le fueron negadas, “pese a que se trata de fondos públicos” (Triny, 2021). También destacan el caso de *Ode-*

brech y los escándalos por las irregularidades en la compra de diversos equipos médicos.

En Panamá, la *Ley sobre acceso a la información pública* (LAIP) se aprobó el 22 de enero de 2002; esta indica que toda persona tiene el derecho de solicitar información “sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna”, al igual que en otros países el acceso es gratuito y el solicitante solo debe costear la reproducción de la información, de ser necesaria. La solicitud se hace por escrito o por correo electrónico, conteniendo los siguientes datos: nombre del solicitante, número de cédula de identidad, dirección residencial o de oficina y número telefónico donde puede ser localizado. El funcionario que reciba la solicitud tiene treinta días para enviar la información o contestar por escrito informando que no la posee y dónde se encuentra, también debe llevarse constancia de la entrega. Establece sanciones para aquellos funcionarios que obstaculicen o impidan el acceso a la información.

Estos intrínquilis en materia de acceso a la información pública, entre otros aspectos sobre controles y persecución judicial a periodistas, dejaron a esta nación en el último lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, en su más reciente edición.

En 2013 se aprobó la ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), siguiendo algunas de las orientaciones dadas por la OEA, siendo la oficina encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes, tratados y convenios relacionados con la petición y el acceso a la información pública y la transparencia. Esta oficina fue fundada como una institución pública y descentralizada del Estado, con autonomía administrativa y funcional.

Igualmente, se creó la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción bajo la supervisión de la ANTAI, que ha sido rechazada por diferentes grupos, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Se ha duda-

ESTUDIOS

do del sentido mismo de esta instancia (Reyes, 2022); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) expresó su preocupación de que la comisión “... solo tome en cuenta a determinados grupos con un criterio totalmente excluyente” (Gordón, 2022); la misma preocupación expresó la Coalición por Panamá Pro-Transparencia y Anticorrupción en un comunicado donde destacó que la idea no es crear “comisiones excluyentes” (Aparicio, 2022); y por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) que considera que esta carece de representatividad (*La Estrella de Panamá*, 2022). Así, el abogado Ernesto Cedeño interpuso un recurso contencioso-administrativo para declarar nulo por ilegalidad el decreto que crea la comisión (Reyes, 2022).

El gobierno panameño se comprometió a establecer un “Gobierno Abierto”, por lo que la ANTAI fundó en 2018 la Comisión Nacional de Gobierno Abierto Panamá para establecer mecanismos de diálogo entre los representantes del gobierno y la sociedad civil. Esta comisión está conformada por tres organismos gubernamentales, seis organizaciones civiles y dos instituciones observadoras. Entre esta y otras iniciativas por parte de las instituciones gubernamentales, como el lanzamiento del Presupuesto Abierto, el Estado sigue con su política de “Gobierno Abierto”, pero siguen siendo constantes los llamados de las ONG y los expertos para que se tomen medidas contundentes contra la corrupción y en pro de la transparencia y el acceso a la información.

PARAGUAY

Paraguay es un país marcado por la herida de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, común denominador en América Latina. Durante 35 años (de 1954 a 1989) vivió diferentes mecanismos de censura, limitando los medios de comunicación o cerrándolos, 35 años afectados por la corrupción y las múltiples violaciones a los derechos humanos, crímenes que en su mayoría no fueron resueltos. Aunado a esto, un único partido ha llevado la delantera durante la mayor parte del tiempo; de acuerdo a *France 24*, de no ser por la “... irrupción de un pe-

ríodo de gobierno de izquierda en el 2008, el Partido Colorado llevaría más de 70 años en el poder del Paraguay” (*France 24*, 2018), partido al cual pertenecía el dictador Stroessner. Este predominio de un mismo partido ha causado la perpetuación de prácticas contra los derechos de la libertad de expresión, información y contra los principios de transparencia de la nación.

En Paraguay existe la *Ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental*, promulgada en 2014 y vigente desde 2015, que garantiza que la información pública esté sometida a la publicidad y que el acceso es gratuito y sin necesidad de justificar la razón de la solicitud. La petición debe presentarse ante la oficina correspondiente de manera escrita, por correo electrónico o de forma verbal (de hacerse verbal debe extenderse un acta) y esta debe presentarse con la identificación del solicitante, su domicilio, la descripción de la información que se necesita y el formato en el que prefiera recibir la información. El organismo tiene quince días hábiles para responder y en caso de ser negada esta solicitud, deberá informarse al solicitante las vías para apelar la decisión.

Antes y después de ser aprobada esta ley, se ha alertado constantemente sobre las excesivas demandas y juicios contra periodistas por difamación al exponer hechos de información pública, y medios demandados y obligados a pagar cuantiosas indemnizaciones, que ponían en riesgo “la propia existencia de los mismos”. La Sociedad Interamericana de Prensa –SIP– habló a favor de la despenalización de los delitos de injurias y calumnias, una tendencia que estaba avanzando en otros países (SIP, 2007).

En 2019, Flavia Borja y Pablo Gastón Ortiz, pertenecientes al Sindicato de Periodistas de Paraguay, destacaron que en el país se ha establecido un monopolio en los medios de comunicación, un vaciamiento de recursos a los medios públicos y varias medidas como “... el acoso judicial contra periodistas y la presión económica del sector privado contra los medios tradicionales” (Borja y Ortiz, 2019). Para el año 2021, la SIP volvió a alertar sobre la violencia e intimidación hacia los medios, recordando que Paraguay es uno de los pocos países

que no ha despenalizado los delitos de difamación, “... un arma utilizada mayoritariamente por funcionarios públicos para mantener sin transparencia sus gestiones públicas”, lo que afecta la libertad de prensa e información en el país (EFE, 2021).

Un ejemplo de esto es el caso contra periodistas de *ABC Color* en mayo de 2019, cuando un senador querelló al periodista Juan Carlos Lezcano tras publicar una investigación sobre unos hechos de corrupción que involucraban al funcionario. Caso similar es el de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien tomó acciones judiciales contra el periodista Marcos Velázquez después de que este publicara varios artículos sobre la corrupción en el deporte.

A esto se le suma la falta de inversión y la política represiva contra diversas radios comunitarias, entre las que destaca el cierre de la *Radio Comunitaria de San Pedro*, lo que limitó el acceso a la información y la libertad de expresión de los campesinos de la zona. Además, Borja y Ortiz mencionaban que más de treinta medios de comunicación tradicionales pertenecían a cuatro grupos empresariales y alegaban que “... el Ministerio del Trabajo no tomó las medidas correspondientes para hacer frente a violaciones de derechos laborales que afectan a la entrega de información plural a la ciudadanía.” (Borja y Ortiz, 2019).

Por otra parte, desde hace 45 años el PNUD trabaja con la nación, describiéndola, en palabras de la representante residente, Silvia Morimoto, como “... un diamante en América Latina” (*La Nación*, 2022). Además, el país está trabajando en el programa Sistema Integrado de Participación Ciudadana, cuya función será el aportar la información en tiempo real sobre las gestiones de la cartera del Estado. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de acuerdo a los datos de la dirección de las respectivas oficinas de Transparencia y Anticorrupción, para septiembre de 2022 cumplía con las obligaciones de transparencia activa en un nivel del 100 %, al igual que el Ministerio de Salud y otras instituciones.

PERÚ

En Perú cumplió veinte años la promulgación de la *Ley de transparencia y acceso a la información pública* (Ley N° 27806), refrendada el 13 de julio de 2002 por el Congreso de la República, en la cual se establecieron principios de publicidad en toda la información que posea el Estado, salvo por las excepciones previstas en la propia Ley, en su artículo 15, referido a la información expresamente clasificada como secreta a través de un acuerdo adoptado por la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros, con base en razones de seguridad nacional.

[...] de no ser por la “... irrupción de un período de gobierno de izquierda en el 2008, el Partido Colorado llevaría más de 70 años en el poder del Paraguay” (*France 24*, 2018), partido al cual pertenecía el dictador Stroessner. Este predominio de un mismo partido ha causado la perpetuación de prácticas contra los derechos de la libertad de expresión, información y contra los principios de transparencia de la nación.

Define la ley a la información clasificada en términos de “... aquella cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático”. Establece que dicho acuerdo ministerial deberá ser revisado cada cinco años a efectos de evaluar su desclasificación y que una vez se haga pública, se evaluará si tal información se adecuaba al criterio. También incluye aquella que pueda afectar al país en negociaciones o tratos internacionales, la información protegida de secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil, la información interna de entidades de la Administración Pública o de comunicaciones entre estas que contengan recomendaciones y opiniones producidas como parte del proceso deliberativo, previo a la toma de una decisión; la información obtenida por

ESTUDIOS

asesores jurídicos de las entidades de la Administración Pública, cuya publicidad revelara estrategias de defensa judicial; la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

Además, considera que pudiera ser objeto de clasificación la información cuya divulgación pudiera entorpecer la prevención o investigación sobre un crimen, la información relativa a datos personales o que implique una invasión a la intimidad personal.

El texto aclara que no será considerada información clasificada o secreta aquella relacionada con la violación de derechos humanos.

En febrero de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú ofreció información sobre los diferentes actores, procedimientos y plazos relativos al acceso a la información pública en esa nación. Indicó que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública, siempre y cuando corra con los costos de reproducción de la información demandada.

REPÚBLICA DOMINICANA

En la actualidad, la Constitución de la República Dominicana indica en el artículo 49 que:

Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley [y que, además] Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley.

(Artículo 49, Constitución de la República Dominicana)

Este país también cuenta con la *Ley general de libre acceso a la información pública* (LG-LAIP), aprobada en 2004, cuya finalidad ha sido permitir que los ciudadanos obtengan los datos en manos de entidades estatales, mediante solicitud, y que tal información deberá ser suminis-

trada de manera obligatoria por los funcionarios públicos. Según el artículo 7 de esta ley, para poder solicitar información es necesario hacer una petición escrita que contenga:

- a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión;
- b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere;
- c) Identificación de la autoridad pública que posee la información;
- d) Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas.

(Artículo 7, Ley general del libre acceso a la Información Pública)

Igualmente, se menciona que el acceso público a la información es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma.

Para el año 2012, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre una reforma de ley que de aprobarse “... causaría un enorme retroceso para la libertad de expresión”, ya que buscaba elevar a delito penal los cargos de difamación e injuria y las expresiones “... ofensivas contra el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República”. Este fue un intento de establecer una ley mordaza que hubiese violado la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Posteriormente, dicha propuesta fue vetada.

A pesar de tener leyes a favor del libre acceso a la información pública, muchos son los casos y las denuncias por la obstaculización al acceso, siendo constantes los llamados de la SIP, tal como lo declaró Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, a “... adaptar la legislación nacional a los criterios de la jurisprudencia interamericana” (SIP, 2022). Un ejemplo sobre aspectos restrictivos fue el impedimento del acceso a la información sobre el caso Medusa¹, donde, a pesar de que los periodistas fueron registrados, la información no les fue dada:

La Secretaría del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional habría recibido instrucciones desde la Suprema Corte de Justicia de no ofrecer ninguna información pública a los periodistas que se presenten al tribunal a preguntar sobre la fecha y el lugar en la que será conocido el caso Medusa. (*Diario Libre*, 2022)

De esta forma, se registraron, según la SIP, numerosas obstaculizaciones al ejercicio de la prensa y un gran recelo por parte de las instituciones y los funcionarios para divulgar la información que se les solicita bajo el amparo de la LGLAIP, así como muchas solicitudes que ven pasar los plazos de entrega sin recibir respuesta por parte de los organismos competentes (Cuevas G., 2022).

Sumado a esto, existen casos donde no solo se niega el acceso a la información, sino que además los ciudadanos resultan agredidos por los funcionarios de las instituciones. Tal fue el caso de agresión en una dependencia de la Dirección General de Tránsito Terrestre en abril de 2022, donde el defensor del pueblo y varios miembros de la prensa fueron violentados y despojados de sus cámaras y teléfonos cuando asistieron al lugar para “... requerir informaciones sobre las denuncias de retenciones irregulares de vehículos” (Molina T., 2022).

De acuerdo al artículo 30 de la *Ley de acceso a la información*, los funcionarios o agentes responsables que impidan el acceso a la información pueden cumplir penas privativas de libertad que varían entre los seis meses a dos años e inhabilitación para los cargos públicos por cinco años. Pero, según informes de prensa, muchos son los organismos que incumplen la entrega de la información requerida o los plazos de entrega, entre estos, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas (Domínguez, Y., 2022).

Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIEIG), aseveró que desde la institución se ha estado haciendo todo lo posible por alcanzar la transparencia, proceso que fue descuidado desde la promulgación de la LGLAIP en el 2004 (Cuevas, G., 2022). No obstante, para junio de 2022, se repitió el caso

del 2012 al presentarse un proyecto de ley orgánica que buscaba regular la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Dicha ley fue aprobada en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados causando un gran rechazo en múltiples sectores de la población (*Diario Libre*, 2022).

[...] existen casos donde no solo se niega el acceso a la información, sino que además los ciudadanos resultan agredidos por los funcionarios de las instituciones. Tal fue el caso de agresión en una dependencia de la Dirección General de Tránsito Terrestre en abril de 2022, donde el defensor del pueblo y varios miembros de la prensa fueron violentados y despojados de sus cámaras y teléfonos

URUGUAY

En Uruguay, visto por expertos en materia de libertades como una excepción en América Latina, se observa una decadencia en diversos derechos como la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública. Para Fabián Cardozo, presidente de la Federación de periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), el gobierno “... tiene un marcado interés por controlar el relato comunicacional de lo que se dice sobre la gestión” (*El País*, 2022), y este año la nación bajó del puesto 18 al 44 en la clasificación mundial de libertad de prensa, según el reporte de Reporteros Sin Fronteras (RSF), cuestión que fue criticada tanto por el gobierno como por diversos periodistas de la nación. Dentro del informe de la RSF se hablaba del panorama mediático que, aunque bastante pluralista, “se concentra en tres grandes grupos” y sobre la intimidación a periodistas (*Caras&Caretas*, 2022). En el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que solo evalúa aspectos vinculados con la acción institucional, el país descendió de la franja de paí-

ESTUDIOS

ses con libertad de expresión, a la de naciones con baja restricción, durante la última edición.

El país cuenta con la *Ley de acceso a la información pública* que tiene como objeto "... promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública". Según la ley, la solicitud de información debe hacerse por escrito ante el titular del organismo o tramitarse por Internet a través de los portales, en una forma que debe incluir:

- A. La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación.
- B. La descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización.
- C. Y, opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo.

(Ley de Acceso a la Información Pública)

Otra discusión dentro de la ley de medios se ha dado por la falta de regulación que garantice el libre ejercicio de los derechos humanos dentro del Internet. En cuanto a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay ha llevado diversas propuestas sobre la iniciativa "Internet, libertad de expresión y acceso a la información".

El acceso es gratuito, pero de necesitarse un soporte, la reproducción corre por cuenta del solicitante, como ha sido el común en la gran mayoría de las leyes en la materia, anteriormente descritas. El ente está obligado a permitir el acceso o contestar la consulta inmediatamente; de lo contrario, el plazo para responder la solicitud es de veinte días, prorrogables por veinte días más y en la misma no se contemplan sanciones para aquellos que, sin justificación, nieguen el acceso a la información.

Para el 7 de octubre de 2022, el diario *La Nación* denunciaba que el Ministerio de Justi-

cia uruguayo no había respondido una solicitud tramitada a través del portal de Acceso a la Información Pública, cuyo plazo ya había vencido (*La Nación*, 2022). Según un informe elaborado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Universidad Católica del Uruguay, 57 % de los organismos no cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública. Amnistía Internacional, también había denunciado en julio de 2022 acerca de "... varios pedidos que no fueron contestados o se respondieron fuera de plazo o con información insuficiente" (*La Red* 21, 2022).

La negación de información no es la única característica importante, la amenaza e intimidación a periodistas es también un hecho que va en aumento en la nación uruguaya. El periodista Gabriel Pereyra denunció en septiembre de 2022 que ha sido objeto de "vigilancia y seguimiento" ordenada desde la alta cúpula del Ministerio del Interior, como reseñó el diario *Hoy*. El periodista uruguayo ha publicado investigaciones que han servido para destapar la corrupción policial, por lo que esta situación no solo fue un atentado a la libertad de información de prensa, sino también un atentado al derecho de los ciudadanos de recibir información veraz sobre lo que ocurre en los organismos policiales.

Otra táctica utilizada es la demanda, por difamación e injurias, a periodistas por sus trabajos y publicaciones. Para septiembre de 2021 CAinfo alertaba que de julio a septiembre se habían abierto al menos ocho procesos judiciales de este tipo por parte de funcionarios y legisladores. La línea actual en cuanto a derechos humanos, promueve la despenalización de los delitos de prensa, cuestión a la que Uruguay se unió en 2009, pero que aún se contemplan en el código penal y que siguen llevándose a cabo "... a raíz de publicaciones periodísticas" (*La Diaria*, 2021).

En este país también existe la ley de prensa, que habla en los artículos 1, 3 y sobre la libertad de información; y la *Ley de servicios de comunicación audiovisual*, mejor conocida como la ley de medios, que ha sido objeto de múltiples debates, como la discusión sobre la

derogación del artículo 56 o la discusión sobre proyectos donde se ha buscado derogar completamente la ley e implementar la ley de Rendición de Cuentas, una normativa aprobada por la dictadura y que “... perseguía la disidencia en nombre de conceptos como la ‘tranquilidad pública’ y la afectación a la nación” (La Diaria, 2022).

Otra discusión dentro de la ley de medios se ha dado por la falta de regulación que garantice el libre ejercicio de los derechos humanos dentro del Internet. En cuanto a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay ha llevado diversas propuestas sobre la iniciativa “Internet, libertad de expresión y acceso a la información”.

VENEZUELA

Se debe explorar a profundidad el complejo panorama político venezolano, para poder comprender cómo la *Ley de transparencia y acceso a la información de interés público*, promulgada el 17 de septiembre de 2021, ha sido vista como un mecanismo de silencio, en lugar de acceso.

Las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, no fueron consideradas legítimas por factores de la oposición que decidieron no participar. La principal razón de la controversia fue que la directiva del Consejo Nacional Electoral no fue elegida por el ente legislativo –de mayoría opositora–, como correspondía de acuerdo con la Ley, sino por el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el poder Ejecutivo. Los comicios fueron cuestionados por El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, Estados Unidos y la Unión Europea.

Es ese Parlamento, elegido sin atención a denuncias que ponían en duda su legitimidad, el que, casi un año después, promulga la *Ley de transparencia y acceso a la información de interés público*. Según lo señalaron expertos en la materia, el instrumento se sumó a una lista de leyes que han violado los derechos informativos de los venezolanos. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, organización no gubernamental, lo incluyó en un reporte que ti-

tuló “Leyes para silenciar”, publicado en agosto de 2022.

En su reporte, IPYS Venezuela destaca la vaguedad del régimen de excepciones establecido en el artículo 7 de la Ley, que violaría el principio de legalidad (principio del Derecho Público según el cual el poder debería someterse a la voluntad de la ley y no al de las personas), al permitir aplicación o interpretación arbitraria o abusiva de las normas:

Los sujetos obligados podrán, mediante decisión motivada, exceptuarse de proveer información cuando el acceso a ella pudiere generar una amenaza o vulneración a los derechos humanos, la salud pública, el orden público, la defensa integral de la Nación o el normal desarrollo del régimen socioeconómico de la República.

(Artículo 7, Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público)

En ningún artículo de esta Ley, refiere IPYS Venezuela, se establece el principio de transparencia activa, es decir, que se garantice que los funcionarios harán del conocimiento público la información de interés general. Lo que sí establece son condicionantes para la solicitud de información, en su artículo número 9, sobre la solicitud de la información:

Artículo 9: La solicitud de información de interés público deberá contener los siguientes datos:

- 1.- Identidad del solicitante o, en su defecto, de la persona que actúe como su representante, con expresión de sus nombres, apellidos y cédula de identidad.
- 2.- Información de contacto para recibir notificaciones así como la información solicitada.
- 3.- Una descripción suficientemente precisa de la información solicitada, para permitir que sea ubicada.
- 4.- Los motivos que justifican la solicitud de información de interés público.

En caso de que el sujeto obligado tenga dudas acerca del alcance o contenido de la información solicitada, deberá ponerse en contacto con el solicitante con el objetivo de aclarar su petición. La

ESTUDIOS

información de interés público solicitada deberá entregarse de la manera más eficiente y que suponga el menor costo posible para los sujetos obligados. (*Ibidem*)

Tales condicionamientos, advierte IPYS, irropean estándares interamericanos de protección en este sentido: el no estar obligados a presentar la identidad para hacer la solicitud, es decir, poder hacerlo de manera anónima; el no estar obligados a justificar la solicitud; y no dejar la puerta abierta a posibles sanciones o represalias por formular las solicitudes (IPYS Venezuela, 2022).

En Venezuela, el Gobierno ha reprimido a representantes de la oposición y a periodistas independientes. A lo largo de la última década, el país ha registrado un descenso abrupto en su Índice de Transparencia Internacional, con su calificación más baja hasta la fecha, 14 puntos de 100 posibles, en 2021

Por lo pronto, en la práctica, es frecuente que los periodistas críticos se conformen con citar la fuente oficial, replicando declaraciones provenientes de medios adscritos al Estado, sin acceso a los eventos que involucren movilización de la élite gubernamental, renuente a preguntas incómodas. También sigue sin aparecer el Boletín Epidemiológico que antes difundía cifras de la realidad sanitaria en Venezuela, el cual dejó de publicarse en 2017, ni los partes asociados a las víctimas del crimen en el país, que se han silenciado desde 2003.

En Venezuela, el Gobierno ha reprimido a representantes de la oposición y a periodistas independientes. A lo largo de la última década, el país ha registrado un descenso abrupto en su Índice de Transparencia Internacional, con su calificación más baja hasta la fecha, 14 puntos de 100 posibles, en 2021 (Transparencia Internacional, 2022).

CONCLUSIONES

El derecho al acceso a la información pública, desde su aspecto base, como lo es la posibilidad de recibir información, está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El panorama de leyes en los veintidós países incluidos en esta mirada, deja a Cuba y Bolivia como las únicas naciones en las cuales no existen leyes de acceso a la información pública. No obstante, algunas leyes no cumplen del todo estándares internacionales en la materia, como ocurre con el caso de Venezuela, mientras que en otras, las complejidades de las realidades dejan como letra muerta lo establecido en el texto, tal como sucede en Nicaragua.

A pesar de que en algunos casos las leyes gozan de ventajas con respecto a otras, como es el caso de México, que incluso presenta la concepción de un sistema nacional de corte independiente y colegiado que vela por este principio, el acceso a la información pública no está del todo garantizado, dada la violencia contra periodistas y situaciones irregulares que provocan autocensura. El debilitamiento del Estado en Colombia, donde la presencia de irregulares cambia la posibilidad de informarse en zonas de conflicto, pone en duda el estricto cumplimiento del acceso a la información pública contemplado en la ley correspondiente.

Una de las resultantes de esta situación de debilitamiento en el acceso a la información pública es el detrimento de la confiabilidad en las noticias vinculadas con la cosa pública. Los medios informan, con periodistas que sortean los bloqueos y opacidades, pero, en el atisbo de data precisa, los silencios y las especulaciones dejan flancos. ¿Se puede ser veraz sin la precisión que produce la obstrucción en el acceso a la información pública por parte de ciertos gobiernos? ¿Se puede ser veraz, al ciento por ciento, solo con proyecciones, estimaciones de expertos, sin la perspectiva posicional privile-

giada de los actores en centros de poder, que en no pocos momentos en la historia niegan todo el acceso a la información?

La transparencia como garante de ciudadanía, y esto como aspecto fundamental en la construcción de opinión pública en democracia, se pone en duda ante excesos de secretismo en no pocas naciones, incluso en aquellas donde la libertad de expresión pareciera funcionar mejor. La tensión en la región, cargada de nuevas formas de autoritarismo, con algunas fórmulas personalistas como la que tiene lugar en El Salvador, dejan claro que el debate no ha terminado, y que la lucha por leyes que protejan al ciudadano en su derecho a saber no ha concluido, ni en la letra ni en la práctica.

LEÓN HERNÁNDEZ

Periodista, profesor universitario, investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, miembro de la cohorte 2016-2017 del programa Next Generation Leaders del McCain Institute de la Universidad de Arizona. Miembro del Consejo de Redacción de la revista *Comunicación*.

CARLA ZAMBRANO

Estudiante de Comunicación Social en la UCAB. Asistente de investigación en el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCSB (CIC-UCAB)

REFERENCIAS

Introducción

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información: un derecho olvidado en Venezuela. (2018, septiembre 28). CEPAZ. <https://cepaz.org/articulos/dia-internacional-del-derecho-de-acceso-universal-a-la-informacion-un-derecho-olvidado-en-venezuela/>

Wikipedia contributors. (s. f.). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos&oldid=147947938

Estados Unidos

Wikipedia contributors. (2019, 25 de julio). *Freedom of Information Act*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado 06 de enero de 2023, de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freedom_of_Information_Act&oldid=117699661

Honduras

Boletín 04 - Percepción sobre transparencia y acceso a la información pública. (2020, junio 26): Clibrehonduras.com. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <http://www.clibrehonduras.com/cl/index.php/gestion-del-conocimiento/boletines/1193-boletin-04-percepcion-sobre-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

Boletín 04 COVID-19 en Honduras. (s. f.): Clibrehonduras.com. Recuperado 06 de octubre de 2022, de http://www.clibrehonduras.com/cl/images/Doc/Boletin_04_Clibre.pdf

El Heraldito, F. (2022, septiembre 30): "Un total de 157 instituciones aplazadas en transparencia en Honduras". En: *El Heraldito*. Recuperado 07 de octubre de 2022, de <https://www.elheraldo.hn/honduras/un-total-de-157-instituciones-aplazadas-en-transparencia-honduras-gobierno-xiomara-castro-rendicion-LC10307378>

El Parlamento de Honduras deroga Ley de Secretos para combatir la corrupción. (2022, marzo 2): swissinfo.ch. Recuperado 07 de octubre de 2022, de https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-corrupci%C3%B3n_el-parlamento-de-honduras-deroga-ley-de-secretos-para-combatir-la-corrupci%C3%B3n/47395842

France. (2022, marzo 2): "Honduras deroga la ley de secretos para combatir la corrupción". En: *France 24*. Recuperado el 09 de octubre del 2022, de <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220302-honduras-deroga-la-ley-de-secretos-para-combatir-la-corrupci%C3%B3n>

Ley de transparencia y acceso a la información pública. (s. f.): Gob.hn. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://portalunico.iaip.gob.hn/assets/docs/leyes/ley-de-transparencia-y-reglamento.pdf>

Ley de transparencia y acceso a la información pública de Honduras (Decreto 170). (s. f.): Cepal.org. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-de-transparencia-y-acceso-la-informacion-publica-de-honduras-decreto-170>

Transparencia Internacional. *Transparencia Internacional exige frenar prácticas que permiten la entrada del crimen organizado y el narcotráfico en Honduras* - Press. (2022, febrero 17). Transparency.org. Recuperado 09 de enero de 2023, de <https://www.transparency.org/es/press/transparencia-internacional-exige-frenar-practicas-que-permiten-la-entrada-del-crimen-organizado-y-el-narcotrafico-en-honduras-juan-orland-hernandez>

Jamaica

Centro Carter. (2005): *Frequently asked questions about the Jamaican access to information act*. Cartercenter.org. Recuperado 01 de enero de 2023, de https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/ati_faqs_jamaica.pdf

ESTUDIOS

Jamaica - Índice de Percepción de la Corrupción. (2022, febrero 10): Datosmacro.com. Recuperado 06 de enero de 2023, de <https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/jamaica>

México

HARO-VÁSQUEZ, N. (2017): *La Ley de Transparencia de Jalisco y su armonización con la Ley General de Transparencia: entre la medición de la calidad normativa y las dificultades de su aplicación. Un estudio de caso*. Tesis para obtener el grado de Maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales, Universidad de Guadalajara. Recuperado el 16 de enero de 2023, de <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2161/1/Ley%20de%20Transparencia%20de%20Jalisco%20y%20su%20armonizaci%C3%B3n-MTPDP.pdf>

Ley General de Acceso a la Información Pública. (2015): Cepal.org. Recuperado el 09 de enero de 2023, de <https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/instrument/files/LGTAIP%20MEX.pdf>

Nicaragua

DIOP, A. (2022, enero 19): “Ley de Ciberdelitos: un hacha contra la libertad de expresión”. En: *Divergentes*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.divergentes.com/ley-de-ciberdelitos-un-hacha-contra-la-libertad-de-expresion/>

HERNÁNDEZ, D. (2022, agosto 26): “Cierre de medios locales impacta en las zonas rurales de Nicaragua”. En: *Voz de América*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.vozdeamerica.com/a/cierre-de-medios-locales-impacta-en-las-zonas-rurales-de-nicaragua/6718481.html>

INFORME #3 SITUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN NICARAGUA. (s. f.). Urnasabiertas.com. Recuperado 19 de octubre de 2022, de https://urnasabiertas.com/wp-content/uploads/2022/09/UA_Situacion-de-la-Transparencia-Municipal.pdf

Ley de acceso a la información pública. (s. f.): Oas.org. Recuperado 19 de octubre de 2022, de http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_N_2.pdf

Ley especial de ciberdelitos. (s. f.): Gob.ni. Recuperado 19 de octubre de 2022, de [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/\(\\$A11\)/803E7C7FBCF44D7706258611007C6D87](http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($A11)/803E7C7FBCF44D7706258611007C6D87)

OEA. (s. f.): *La CIDH, su RELE y OACNUDH condenan los reiterados ataques a la libertad de expresión en Nicaragua*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/216.asp>

SELSER, G. (2022, septiembre 24): “Nicaragua dice que cerraron CNN por ‘injerencista’”. En: *The Los Angeles Times*. Recuperado 19 de octubre de 2022, de <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-09-23/nicaragua-dice-que-cerraron-cnn-por-injerencista>

Panamá

CCIAP: “Comisión Anticorrupción es insuficiente y carece de representatividad”. (s. f.): *La Estrella de Panamá*. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://www.laestrella.com.pa/nacional/220906/cciap-comision-anticorrupcion-insuficiente-carece-representatividad>

pa/nacional/220906/cciap-comision-anticorrupcion-insuficiente-carece-representatividad

Coalición Pro-Transparencia y Anticorrupción cuestiona Decreto que creó Comisión Ciudadana contra la Corrupción. (s. f.): *La Estrella de Panamá*. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://www.laestrella.com.pa/nacional/220906/coalicion-pro-transparencia-anticorrupcion-cuestiona-decreto-creo-comision-ciudadana-corrupcion>

CoNEP preocupada por decreto que crea Comisión ciudadana contra la corrupción. (s. f.): *La Estrella de Panamá*. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://www.laestrella.com.pa/nacional/220905/conep-preocupada-decreto-crea-comision-ciudadana-corrupcion>

Ley No.6 De 22-01-2002. (s. f.): Gob.pa. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <http://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf>

Ley sobre acceso a la información pública (Ley No. 6). (s. f.): Cepal.org. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-acceso-la-informacion-publica-ley-no-6>

NICHOLS, M. A., MELL, L. K., MacDERMED, D., WITT, M. E., WEICHSELBAUM, R. R., y CHMURA, S. J. (2006): “Índice de percepción de la corrupción”. En: *International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics*, 66(3), S221. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2006.07.423>

OEA. (s. f.): *Concluye taller de alto nivel sobre el acceso equitativo a la información pública en Panamá*. Oas.org. Recuperado 14 de octubre de 2022, de http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_acceso_informacion_taller_panamá_jun-27-2013.html

Panamá da un paso importante en transparencia y accesibilidad en materia de presupuesto. (2022, abril 13): Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Recuperado 14 de octubre de 2022, de <https://www.mef.gob.pa/2022/04/panama-da-un-paso-importante-en-transparencia-y-accesibilidad-en-materia-de-presupuesto/>

Panamá: Denuncian secretismo del gobierno en el manejo de fondos públicos para la reactivación económica. (s. f.): Convoca.pe - Agenda Propia. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://convoca.pe/agenda-propia/panama-denuncian-secretismo-del-gobierno-en-el-manejo-de-fondos-publicos-para-la>

Panamá promulga Decreto Ejecutivo que crea Comisión Ciudadana Contra la Corrupción. (s. f.): Gob.pa. Recuperado 15 de octubre de 2022, de <https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/-Panama-promulga-Decreto-Ejecutivo-que-crea-Comision-Ciudadana-Contra-la-Corrupcion>

POGREBINSCHI, T. (2017): *Comisión Nacional de Gobierno Abierto Panamá*. LATINNO Dataset. Berlin: WZB. <https://latinno.net/es/case/15128/>

REYES, G. (2022, septiembre 5): “Solicitan la nulidad del decreto que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción”. En: *La Prensa Panamá*. <https://www.prensa.com/judiciales/solicitan-la-nulidad-del-decreto-que-crea-la-comision-ciudadana-contra-la-corrupcion/>

Transparencia Internacional (2019, noviembre 1): *Panamá*. Transparency.org. Recuperado el 09 de enero de 2023, de <https://www.transparency.org/en/countries/panama>

Paraguay

BORJA, F., y ORTIZ, P. G. (s. f.): *Derecho a la libertad De expresión e información*. Org.py. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/07/Libertad-de-Expresion-e-Informacion.pdf>

Gaceta Oficial del 19 de septiembre. (s. f.): Oas.org. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <http://www.oas.org/es/sap/dgpe/acceso/docs/Paraguay2014.pdf>

JARAMILLO, A. S. (2018, agosto 15): “La hegemonía del Partido Colorado en la historia de Paraguay”. En: *France 24*. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://www.france24.com/es/20180815-historia-paraguay-partido-colorado-benitez>

La SIP condena “censura y amedrentamiento” a periodistas en Paraguay. (2021, octubre 22): swissinfo.ch. Recuperado 09 de octubre de 2022, de https://www.swissinfo.ch/spa/sip-asamblea_la-sip-condena--censura-y-amedrentamiento--a-periodistas-en-paraguay/47051108

La SIP cuestiona la libertad de prensa en el Paraguay. (s. f.): Sipiapa.org. Recuperado 9 de octubre de 2022, de <https://www.sipiapa.org/notas/1122344-la-sip-cuestiona-la-libertad-prensa-el-paraguay>

MOPC insta a la ciudadanía a solicitar el acceso a la información pública. (s. f.): Gov.py. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://www.mopc.gov.py/index.php/noticias/mopc-insta-la-ciudadania-solicitar-el-acceso-la-informacion-publica>

PNUD celebra 45 años en el país: “Paraguay es un diamante en medio de América Latina”. (2022, octubre 14): En: *La Nación*. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://www.lanacion.com.py/pais/2022/10/13/pnud-celebra-45-anos-en-el-pais-paraguay-es-un-diamante-en-medio-de-america-latina/>

Salud mantiene cumplimiento del 100 % en accesibilidad a la información pública. (2015, enero 16): Gov.Py. Recuperado 09 de octubre de 2022, de <https://www.mspbs.gov.py/portal/26137/salud-mantiene-cumplimiento-del-100-en-accesibilidad-a-la-informacion-publica.html>

República Dominicana

Constitución de la República Dominicana. (s. f.): Gob.do. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://presidencia.gob.do/sites/default/files/statics/transparencia/base-legal/Constitucion-de-la-Republica-Dominicana-2015-actualizada.pdf>

Constitución de la República Dominicana de 1966. (s. f.): Acnur.org. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8872.pdf>

CUEVAS, Graciela (2022a, abril 20): “Periodistas sufren agresión y dificultad para acceder a información en RD”. En: *Diario Libre*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/20/la-libertad-de-prensa-se-enturbio-en-republica-dominicana/1778020>

CUEVAS, Graciela (2022b, abril 22): “Ortiz Bosch: trabajamos para hacer de la transparencia una realidad”. En: *Diario Libre*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/22/etica-busca-que-la-transparencia-sea-una-realidad/1784466>

La SIP alerta contra una ley que causaría un enorme retroceso para la libertad de expresión en República Dominicana. (2012, noviembre 8): Sipiapa.org. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.sipiapa.org/notas/1124752-la-sip-alerta-contra-una-ley-que-causaria-un-enorme-retroceso-la-libertad-expresion-republica-dominicana#:~:text=causar%C3%ADa%20un%20enorme%20retroceso>

Listín Diario. (2022, julio 21): “Congreso esquiva Ley de Libre Acceso a la Información”. En: *Listín Diario*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://listindiario.com/la-republica/2022/07/21/731010/congreso-esquiva-ley-de-libre-acceso-a-la-informacion>

Preocupa a la SIP auge de proyectos anti libertad de prensa en República Dominicana. (2022, junio 23): Siapa.org. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.sipiapa.org/notas/1215241-preocupa-la-sip-auge-proyectos-anti-libertad-prensa-republica-dominicana>

Ley general de libre acceso a la información pública. (s. f.): Oas.org. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_repdom_ley200.pdf

MOLINA, T. (2022, abril 14): “Directores de diarios ven violación a la libertad de prensa en agresión en canódromo”. En: *Diario Libre*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/04/14/directores-de-diarios-hubo-violacion-a-prensa-en-canodromo/1768418>

Participación Ciudadana se opone a ley “mordaza” y dice busca “proteger a funcionarios y legisladores”. (2022, junio 22): *Diario Libre*. <https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/06/22/participacion-ciudadana-rechaza-ley-mordaza/1905055>

Poder Judicial restringe información pública sobre el caso Medusa. (2022, julio 22): *Diario Libre*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2022/07/22/poder-judicial-restringe-informacion-publica-de-caso-medusa/1964027>

ROSARIO, Y. (2022, mayo 30): “Diputados: ley que regularía intimidación busca crear ‘una mordaza’ a la libertad de prensa”. En: *Diario Libre*. Recuperado 29 de septiembre de 2022, de <https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/2022/05/30/creen-ley-regularia-intimidacion-crearia-una-mordaza-a-prensa/1855525>

Uruguay

Acceso a la Información. (s. f.): Com.uy. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://www.impo.com.uy/informacionpublica/>

Amnistía Internacional alerta por retroceso en la libertad de prensa en Uruguay y afectación a varios derechos humanos. (2022, julio 5): LARED21. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://www.lr21.com.uy/comunidad/1461520-amnistia-internacional-alerta-retroceso-derechos-humanos-liberta-prensa-uruguay>

Cainfo alerta por “una serie de demandas judiciales” contra periodistas por difamación e injurias. (2021, septiembre 16): *La diaria*. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/9/cainfo-alerta-por-una-serie-de-demandas-judiciales-contra-periodistas-por-difamacion-e-injurias/>

ESTUDIOS

CAYAFA, P. (2022, septiembre 23): Fabián Cardozo: “Para criticar a APU, lo mejor es hacerlo desde adentro”. En: *El País Uruguay*. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://www.elpais.com.uy/sabado-show/fabian-cardozo-criticar-apu-mejor-hacerlo-adentro.html>

Es un atentado a la libertad de expresión y ojalá se pueda aclarar. (2022, septiembre 27): *Diario Hoy*. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://diariohoy.net/hoy-en-uruguay/es-un-atentado-a-la-libertad-de-expresion-y-ojala-se-pueda-aclarar-209881>

Gobierno propone derogar la ley de medios y restablecer normativa de la dictadura. (2022, junio 30): *La diaria*. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/6/gobierno-propone-derogar-la-ley-de-medios-y-restablecer-normativa-de-la-dictadura/>

Justicia evade transparencia. (2022, octubre 7): *La Nación*. Recuperado 06 de octubre de 2022, de https://www.lanacion.com.py/politica_edicionimpresa/2022/10/07/justicia-evade-transparencia/

Ley No 18.381 Derecho de acceso a la información pública. (s. f.): Oas.org. Recuperado 06 de octubre de 2022, de http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_base_dc_leyes_pais_U_2.pdf

Uruguay bajó casi treinta escalones en libertad de prensa. (2022, mayo 3): *Caras y Caretas*. Recuperado 06 de

octubre de 2022, de <https://www.carasycaretas.com.uy/uruguay-casi-treinta-escalones-libertad-prensa-n52083>

Venezuela

Sociedad Interamericana de Prensa. (2022): *Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa*. Recuperado el 20 de diciembre de <https://www.indicedechapultepec.com/venezuela.html>

IPYS Venezuela. (2022): “*Leyes para silenciar*”, el reporte de IPYS Venezuela que muestra cómo la censura se ha hecho norma. Recuperado 06 de octubre de 2022, de <https://ipys-venezuela.org/2022/08/15/leyes-para-silenciar-el-reporte-de-ipys-venezuela-que-muestra-como-la-censura-se-ha-hecho-norma/>

Transparency International. (2022) *Corruption Perception Index*. Recuperado el 06 de enero de 2022, de <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ven>

Notas

- 1 Caso de corrupción que ha involucrado al menos veintidós empresas y cientos de testigos en República Dominicana, ventilado a mediados de 2022.

Galería de Papel. *Las Telas de Walecka*. Walecka Belisario (2023).

